

PARAGUAY: INFORME DE 2017 SOBRE LA LIBERTAD DE CULTO

Resumen

La constitución otorga el derecho de la persona a elegir y practicar libremente su religión, así como a cambiar de culto; prohíbe la discriminación religiosa y reconoce explícitamente el derecho de las comunidades indígenas a expresar libremente sus creencias. Asimismo, la constitución establece que la relación entre el Estado y la Iglesia católica se basa en “independencia, cooperación y autonomía”, pero no aborda la relación entre el Estado y otros grupos religiosos. Representantes de la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Nacional Paraguaya (ICCAN) informaron que el viceministro de Culto volvió a rechazar su solicitud de reconocimiento oficial, y expresaron su creencia de que la Iglesia católica romana había “bloqueado” su solicitud. Según fuentes de la ICCAN, el viceministro de Culto siguió tratando de retirar su designación como entidades sin fines de lucro a las iglesias que, en opinión del gobierno, no habían cumplido plenamente con la ley que prohíbe su participación en actividades lucrativas. Grupos religiosos no afiliados a la Iglesia católica alegaron que el gobierno apoya y subvenciona desproporcionadamente los salarios de los maestros de las escuelas católicas. Los representantes de la comunidad judía local indicaron que en ocasiones los candidatos a cargos en los gobiernos locales hicieron comentarios antisemitas durante las actividades de su campaña en preparación para las primarias de diciembre de 2017 y la elección general de abril de 2018.

Las organizaciones de derechos humanos informaron que los empleadores menonitas, quienes constituyen la mayor fuente de empleo en las áreas remotas de la región del Chaco, siguieron dando preferencia a los trabajadores indígenas convertidos a su fe, en comparación con los no conversos.

Representantes de la Embajada de los Estados Unidos se reunieron con el viceministro de Cultura en el Viceministerio de Culto para dialogar sobre las dificultades de la ICCAN y otros grupos religiosos para su inscripción como tales, la tramitación de denuncias de discriminación religiosa y la disparidad en la subvención gubernamental de salarios en las diversas escuelas regidas por grupos religiosos. Funcionarios de la embajada también preguntaron sobre las medidas del Viceministerio de Culto para retirar la designación de sin fines de lucro a las iglesias. Asimismo, funcionarios de la embajada se reunieron con representantes de las comunidades católica, menonita, cristiana católica apostólica y judía para hablar del respeto interconfesional por la diversidad religiosa y escuchar sus opiniones sobre la situación de la libertad de culto en el país.

Sección I. Demografía religiosa

El Gobierno de los Estados Unidos calcula que el total de la población de Paraguay asciende a 6,9 millones (cifras a julio de 2017). Según el censo nacional realizado en 2002, el más reciente que informa sobre afiliación religiosa, el 90% de la población es católica romana (comparado con el porcentaje estimado de un 88% de católicos romanos en un informe de *Latinobarómetro* en 2014) y el 6% protestantes evangélicos. Entre otros grupos religiosos, que en su totalidad representan el 4% de la población, se encuentran los testigos de Jehová, judíos, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), musulmanes, budistas, menonitas, la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo (Iglesia de Unificación) y quienes profesan creencias indígenas. La Iglesia menonita, con entre 30.000 y 46.000 afiliados, tiene una destacada presencia en áreas remotas del Chaco central y algunas regiones en la parte este del país. La ICCAN según sus propias cifras cuenta con más de 100.000 miembros.

Sección II. Situación del respeto del gobierno hacia la libertad de culto

Marco legal

La constitución otorga el derecho de la persona (incluidos los miembros de las comunidades indígenas) a elegir y practicar libremente su religión, así como a cambiar de culto. La constitución prohíbe la discriminación de culto y reconoce explícitamente el derecho de las comunidades indígenas a expresar libremente sus creencias.

Conforme a la constitución, la relación entre el Estado y la Iglesia católica se basa en “independencia, cooperación y autonomía”. Por otra parte, la Iglesia católica tiene que atenerse a los mismos reglamentos que el Estado impone a las demás iglesias y grupos religiosos no cristianos. La ley permite la formación de partidos políticos basados en una cierta afiliación religiosa, pero la constitución prohíbe que los miembros en activo del clero de cualquier grupo religioso se postulen a cargos públicos. La constitución no menciona la relación entre el Estado y otros grupos religiosos.

El gobierno exige que todos los grupos religiosos se inscriban en el Viceministerio del Culto, y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) requiere la inscripción de todas las entidades religiosas como agentes no financieros. Entre otros requisitos, los grupos religiosos tienen que

presentar constancia de su condición legal de entidad sin fines de lucro y recibir una reautorización anual. Los líderes religiosos tienen que someterse a verificaciones de sus antecedentes penales y financieros. Según el Viceministerio de Culto, existen 512 grupos religiosos con inscripción vigente, incluidos 12 grupos nuevos añadidos en 2017. No se penaliza ni se imponen sanciones monetarias por la falta de inscripción, pero los inscritos están exonerados del pago del I.V.A. y otros cobros gubernamentales.

La ley prohíbe la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La constitución otorga a las escuelas privadas el derecho a ofrecer educación religiosa, y para poder hacerlo los únicos requerimientos son que el personal docente lo merezca y posea integridad ética. La inscripción de las escuelas religiosas privadas no es obligatoria, pero el Ministerio de Educación y Cultura reconoce únicamente los títulos concedidos por las instituciones registradas, y solamente las escuelas registradas y reconocidas como entidades sin fines de lucro pueden recibir subvenciones salariales para sus maestros.

La constitución y las leyes permiten la exención del servicio militar a los objetores de conciencia por razones religiosas.

Los misioneros extranjeros afiliados a grupos religiosos registrados no tienen que pagar por las visas de residencia otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores; también deben inscribirse anualmente en el Viceministerio de Culto, pero aquellos que decidan no inscribirse podrán entrar al país con visa de turista.

Paraguay es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas gubernamentales

Representantes de la ICCAN indicaron que el Viceministerio de Culto había vuelto a denegar su solicitud de reconocimiento oficial, y hubo fuentes en la organización que expresaron su creencia de que la Iglesia católica romana presionó al gobierno para que no accediera a la inscripción de la ICCAN. Representantes de la ICCAN también informaron que el gobierno continúa sin reconocer su reclamo de las tierras que alegan les fueron usurpadas por la Iglesia católica romana en 1840.

Asimismo, fuentes de la ICCAN informaron que el Viceministerio de Culto siguió en su empeño de retirar del registro de entidades sin fines de lucro a aquellas iglesias que, en opinión del gobierno, no cumplieron plenamente con la ley que prohíbe que participen en actividades lucrativas.

El Ministerio de Educación y Cultura siguió pagando los salarios de cientos de maestros de escuelas reconocidas como sin fines de lucro, pertenecientes en su mayoría a grupos religiosos católicos. Algunos grupos religiosos no católicos, entre ellos de las comunidades judía y menonita, afirmaron que el gobierno apoyaba de forma desproporcionada a las escuelas católicas y no pagaba a números equivalentes de maestros de escuelas religiosas registradas no católicas. El Viceministerio de Culto no aportó datos, pero declaró que el Estado subvencionaba a algunas escuelas religiosas y a otras no, aduciendo que había escuelas religiosas registradas que no podían recibir apoyo gubernamental por no cumplir con los requisitos de entidades sin fines de lucro.

Representantes de la comunidad judía local indicaron que hubo ocasiones en que los candidatos a cargos locales gubernamentales hicieron comentarios antisemitas durante las actividades de su campaña en preparación de las elecciones primarias y la elección general de abril de 2018, pero no dieron detalles sobre la fecha ni el candidato.

El Viceministerio de Culto informó que los misioneros extranjeros registrados, o que renovaron su inscripción en el curso del año, fueron 557, en su mayoría mormones.

El gobierno siguió apoyando los programas de capellanes de todas las religiones en las fuerzas armadas. Dichos programas incluyeron la capacitación del clero para ofrecer servicios a los miembros de las fuerzas armadas desplegados ya sea a zonas de combate o en misiones de mantenimiento de la paz. El gobierno también siguió permitiendo las actividades y servicios de grupos religiosos de diferentes denominaciones en las prisiones de adultos, mujeres y jóvenes, pero tan solo los grupos cristianos mantuvieron dicha presencia durante el año.

Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad de culto

Los observadores, entre ellos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG), comentaristas políticos y la prensa, afirmaron que la Iglesia católica mantenía un papel influyente en la sociedad y el gobierno. Por ejemplo, inmediatamente después de las manifestaciones del 31 de marzo que ocasionaron el incendio del edificio del Congreso nacional, la Iglesia inició y auspició un diálogo político. Ninguna otra entidad ni denominación religiosa participó en el

diálogo, ni hubo otros grupos que dijeran haber recibido una invitación para participar.

Las organizaciones sindicales y de derechos humanos siguieron afirmando que los empleadores menonitas dieron preferencia en la contratación a los trabajadores indígenas que se habían convertido a su fe, y frecuentemente los menonitas siguieron siendo la mayor fuente de empleo en las áreas remotas de la región del Chaco. Representantes de las ONG que trabajan con las comunidades indígenas, fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas que forma parte de la Fiscalía General del Estado y dirigentes indígenas dijeron que muchos ciudadanos indígenas no entendían que tienen derecho a presentar denuncias por discriminación en el empleo. Estas mismas fuentes indicaron que algunos de los ciudadanos indígenas temían que la denuncia les pudiera ocasionar represalias y discriminación por parte de sus empleadores actuales y futuros. Las organizaciones de derechos humanos siguieron informando que los empleadores menonitas no respetaban los días de celebración religiosa de los indígenas.

Sección IV. Política e interacción del Gobierno de los Estados Unidos

Funcionarios de la embajada se reunieron en el Viceministerio de Culto con el viceministro Herminio Lobos, para dialogar sobre las dificultades que la ICCAN y otros grupos religiosos tenían en la obtención de reconocimiento oficial y la tramitación de denuncias de discriminación religiosa, así como sobre la desigualdad en el financiamiento gubernamental de los salarios en las escuelas administradas por grupos religiosos. Dichos funcionarios también solicitaron información sobre las medidas del Viceministerio de Culto para retirar el registro como entidades sin fines de lucro a las iglesias que, en opinión del gobierno, no habían cumplido plenamente con la ley que prohíbe que participen en actividades lucrativas, y el requisito de la SEPRELAD de que todas las iglesias se registren como agentes no financieros.

Los funcionarios de la embajada se reunieron con dirigentes de las denominaciones católica, menonita, cristiana católica apostólica y judía para dialogar sobre la discriminación religiosa y la actitud hacia sus miembros por parte del gobierno.